Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de **veintidós de enero de dos mil veinticinco.**

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión  **01448/INFOEM/IP/RR/2024**,promovido por **XXXXXXXXXXX,** y a quien en lo sucesivo se le identificará como **EL RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Poder Legislativo,** en lo sucesivo el **SUJETO OBLIGADO**, se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **ANTECEDENTES**

# **SOLICITUD**

1. El **nueve de febrero de dos mil veinticuatro,** se presentó ante el **SUJETO OBLIGADO** a través del SAIMEX, la solicitud de información pública registrada con el número **00069/PLEGISLA/IP/2024;** mediante la cual se solicitó la siguiente información:

*“ De conformidad a la respuesta a la solicitud de información 00033/PLEGISLA/IP/2024 de fecha nueve de febrero del año en curso. Dónde me informa que la comisión de límites territoriales se declara incompetente, de conocer los diferendos limitrofes del Municipio de Teoloyucan. 1.- Solicito me proporcione los acuerdos de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés dónde la Legislatura del Estado se declaró incompetente de seguir conociendo los diferendos limitrofes del Municipio de Teoloyucan. 2.-Todos los documentos anexos de lo solicitado. Por su atención, gracias. “(Sic)*

* Se eligió como modalidad de entrega de la información: A través del **SAIMEX.**

# **RESPUESTA**

1. El **trece de marzo de dos mil veinticuatro,** el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud de información a través de los archivos siguientes:
* ***69 RESPUESTA.pdf***

Oficio de trece de marzo de do mil veinticuatro, firmado por el Servidor Público Habilitado quien informo lo siguiente:

*“Me permito informarle que, luego de un análisis del contenido de la solicitud, se turnó para su atención a la Secretaría Técnica de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios de la “LXI” Legislatura del Estado de México, emitiéndose la respuesta que se adjunta, en archivo en formato electrónico.”*

* ***69 RESPUESTA (COMISION DE LIMITES).pdf***

Oficio de de marzo de dos mil veinticuatro, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios de la “LXI” Legislatura del Estado de México,

* ***Respuesta 069- SAP.pdf***

*Derivado de la realización de una búsqueda exhaustiva en el archivo de la oficina de la Diputada presidenta de la Comisión Legislativa –a la cual tengo acceso directo en uso de las facultades del cargo público que desempeño–, puedo advertir que la información que resulta de interés forma parte de dos expedientes relativos a la sustanciación de dos procedimientos para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales.*

*A continuación enuncio los procedimientos administrativos para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales seguidos en forma de juicio ante la Comisión Legislativa de la Legislatura Local, donde ha estado y/o está interviniendo el municipio de Teoloyucan a través de las personas titulares de la presidencia y de la sindicatura de su ayuntamiento, los cuales son los siguientes:*

**

**

*Una vez expuesto lo que antecede y siendo congruente con el propio contenido de la solicitud de acceso a la información remitida, acentúo preliminarmente que no es posible proporcionar “los acuerdos de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés dónde la Legislatura se declaró incompetente para seguir conociendo los diferendos limítrofes del Municipio de Teoloyucan”, así como “2. Todos los documentos anexos de lo solicitado”.*

 *Lo dicho debido a la existencia de una razón de interés público general y toral*

*Información clasificada como reservada (afectación o vulneración en la conducción de los procedimientos administrativos para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales seguidos en forma de juicio, en tanto no han quedado firmes o no han causado estado y donde está involucrado el municipio de Teoloyucan). En los diferentes tomos que integran cada uno de los expedientes de los procedimientos para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales (6/2022 y 7/2022) –donde ha intervenido el municipio de Teoloyucan–, este servidor público facultado ha logrado observar, así como determinar con el debido detenimiento que obra información clasificada, es decir, calificada legalmente como reservada.*

Asimismo, se remite la Fundamentación Motivación de la Clasificación de la Información considerada como Reservada.

# **INCONFORMIDAD**

1. Inconforme con lo anterior, el **diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro**, el hoy **RECURRENTE,** interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, manifestando las siguientes razones o motivos de inconformidad:
* **Acto impugnado:** *“**La respuesta del sujeto obligado.”*

* **Razones o Motivos de inconformidad:** “*Si el sujeto obligado se considera incompetente de resolver el diferendos limitrofes, ¿Porque le causa perjuicio? Ya se declaró incompetente, tiene que publicar en la gaceta parlamentaria el acuerdo respectivo. Si es competente, ¿Porque se declaró incompetente? Por causar perjuicio a los ciudadanos. El ciudadano tiene el derecho a la identidad, por lo tanto tiene derecho a saber a qué municipio pertenece y a quien pagarle su impuesto predial. Este derecho es superior a cualquier derecho. Si la legislatura no es transparente y no pública estos acuerdos vulneran el derecho humano a la identidad. ¿Quien es.la autoridad competente para resolver los límites territoriales? Sería la única autoridad que podría reservar la información. Pero como se declaró incompetente, ya no es autoridad en la.materia y por lo tanto no podría reservar la información. El pueblo tiene derecho a saber a.que.municipio pertenece, contra eso ni la poderisima legislatura Puede hacer nada.”*

# **MANIFESTACIONES**

1. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión notificado el **veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía **SAIMEX** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, y el **SUJETO OBLIGADO** presentará el Informe Justificado procedente.
2. El **SUJETO OBLIGADO** el **cinco de abril de dos mil veinticuatro,** remitió los archivos siguientes:
* [***Acuerdo PLEGISLA-LXI-CT-12ªext-2024-TERCERO.pdf***](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2059636.page)

Acuerdo por el que se confirma por unanimidad la clasificación total como información reservada de los expedientes de los procedimientos administrativos para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales donde ha estado y/o está interviniendo directa o indirectamente el municipio de Teoloyucan, por un periodo de cinco años.

* [***Consideraciones SAP- RR. 01448-Sol. 069-2024.pdf***](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2059637.page)

Oficio de tres de abril de dos mil veinticuatro, que corresponde al oficio por el que el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta y cuyo contenido es de conocimiento de las partes.

* [***Informe justificado RR. 01448-2024 (sol. 0069-2024).pdf***](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2059638.page)

Informe Justificado en el que solicita se confirme la respuesta.

1. El **PARTICULAR** fue omisos en realizar manifestación alguna que a su derecho conviniera.
2. Finalmente, mediante acuerdo de **veintidós de enero de dos mil veinticinco,** se decretó el cierre de instrucción, por lo que no habiendo más que hacer constar, y--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONSIDERANDO**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del **SAIMEX,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta el **trece de marzo de dos mil veinticuatro**, de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del **catorce de marzo al once de abril de dos mil veinticuatro** ; en consecuencia, el ahora **RECURRENTE** presentó su inconformidad el **diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro**; por lo que se estima que la inconformidad se presentó dentro del lapso legalmente establecido para tal efecto.
2. Por otro lado, el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de la materia actual, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERO.** **Del planteamiento de la *Litis*.**

1. Se solicitó tener acceso, a la información siguiente:

1.- Acuerdos de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés dónde la Legislatura del Estado se declaró incompetente de seguir conociendo los diferendos limítrofes del Municipio de Teoloyucan.

 2.-Todos los documentos anexos de lo solicitado

1. El **SUJETO OBLIGADO**, dio respuesta como quedo referido en el numeral 2 del presente proyecto.
2. Inconforme con lo anterior, el ahora **RECURRENTE,** interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, arguyendo la clasificación de la información.
3. Dicho lo anterior, se colige que , en dichas condiciones, la *Litis* a resolver en este recurso se circunscribe a determinar si se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 179, **fracción II** de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de** México **y** Municipios; fracción que determina la hipótesis jurídica relativa II. La clasificación de la información;;contexto del cual se dolió **EL RECURRENTE** al momento de interponer su inconformidad; de modo tal que el presente recurso de revisión se abocara en determinar si el **SUJETO** **OBLIGADO** con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaantes señalada.

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

*…*

*II. La clasificación de la información;*

## **CUARTO. Del estudio y resolución del asunto.**

1. De acuerdo a las constancias que integran el SAIMEX, se advierte que el **SUJET O OBLIGADO** acepta que genera, posee y/o administra la información, ya que la clasifico la información como confidencial por un periodo de cinco años.
2. Ante todo, se debe resaltar que con las manifestaciones hechas valer por el Sujeto Obligado en su respuesta, proporcionada en el SAIMEX, éste no niega contar con la información solicitada por el recurrente, sino por el contrario, asume que la tiene al reservarla por un periodo de cinco años.
3. Lo anterior es así, ya que el estudio enunciado tiene por objeto determinar si el Sujeto Obligado genera, posee o administra la información solicitada; sin embargo, en aquellos casos en que éste la asume, ello efectivamente está en su poder; por consiguiente, sería ocioso y a nada práctico nos conduciría su estudio, ya que se insiste, la información pública solicitada fue asumida por el Sujeto Obligado.
4. En primer lugar, es conveniente señalar que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en su artículo 4, dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se trascribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.” (Sic)*

1. De lo anterior, se desprende que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual a la letra dice:

*“****Artículo12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*** *(Sic)*

1. Es decir, todo Sujeto Obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserve información es responsables de la misma, teniendo a su vez la obligación de proporcionarla cuando se le requiera, sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; es decir, los Sujetos Obligados sólo se concretarán a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.
2. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03-17, expuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dice:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.*

*Resoluciones:*

*• RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas.*

*• RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.*

*• RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.”*

1. En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, lo que no sucedió en el presente caso.
2. Siempre y cuando no se trate de información reservada o clasificada, que difundirla pondría en riesgo la seguridad jurídica y física del titular de la información, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
3. En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…” (Sic)*

1. Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

***2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y***

***3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”***

1. Con base en lo precedente, se determina que la información emitida por el Sujeto Obligado en su respuesta no cumple con lo establecido por los artículos 4, 12 y 24 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, conforme a lo siguiente:
2. En segundo lugar, es importante destacar que conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.
3. Por todo lo anterior, la reserva de la información implica una clasificación, la cual debe entenderse como el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con las normas aplicables, en consecuencia, es que se analiza el acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria 2024, respecto el acuerdo número PLEGISLA/LX/CT/12ªext/2024/TERCERO, en los expedientes registrados por la Comisión Legislativa con numero 6/2022 y 7/222, en donde está involucrado el municipio de Teoloyucan, por medio de la cual, el Sujeto Obligado confirma por unanimidad, la clasificación total como información reservada, de los expedientes de los procedimientos administrativos para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales donde ha estado y/o está interviniendo directa o indirectamente el municipio de Teoloyucan por un periodo de cinco años.
4. De ahí que, en lo que concierne a la información clasificada como reservada la Ley de Transparencia vigente en nuestra entidad establece en su artículo 140 una serie de hipótesis en las cuales radica la posibilidad de tal clasificación de información, que son:

 *“****Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

***V****. Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***1.*** *Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

***2.*** *La recaudación de las contribuciones.*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII****. La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII.*** *Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

***IX.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

***X.*** *El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización,siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.” (Sic)*

1. Del precepto legal antes referido, se advierte que la Ley de Transparencia vigente en nuestra entidad establece que la información pública será restringida excepcionalmente cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, estableciendo una serie de supuestos entre los que se encuentran cuando afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los expedientes judiciales en tanto no hayan quedado firmes, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva**,** la cual deberá estar documentada, o el daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor al interés público, siempre y cuando esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes.
2. Ahora bien, es pertinente mencionar respecto de los límites territoriales que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libere y Soberano del Estado de México, dispone lo siguiente:

*“Artículo 112.- La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el municipio libre. Las facultades que la Constitución de la República y el presente ordenamiento otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.*

*Los municipios del Estado, su denominación y la de sus cabeceras, serán los que señale la ley de la materia.” (Sic)*

1. Con base a la disposición legal referida, el municipio tiene la facultad de establecer su división territorial, ante ello viene a colación lo establecido por los artículos 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los que disponen:

*“Artículo 4.- La creación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, cambios en su denominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como la solución de conflictos sobre límites intermunicipales, corresponden a la Legislatura del Estado.*

*Artículo 7.- La extensión territorial de los municipios del Estado, comprenderá la superficie y límites reconocidos para cada uno de ellos.” (Sic)*

*Artículo 8.- La división territorial de los municipios se integra por la cabecera municipal, y por las delegaciones, subdelegaciones, colonias, sectores y manzanas, con la denominación, extensión y límites que establezcan los ayuntamientos.” (Sic)*

1. Una vez precisado lo anterior, se procede a realizar los siguientes cuestionamientos para determinar la procedencia de la entrega de la información requerida por el recurrente.

Primera cuestión: ¿Pueden ser restringidos los Principios establecidos en el artículo 6 de la Constitución Federal respecto del derecho de acceso a la información?

1. El artículo 6 de la Constitución General de la República, establece una serie de principios y bases sobre las cuales se erige el reconocimiento y ejercicio del derecho humano del acceso a la información pública.
2. En este sentido, en la fracción I del citado artículo, establece que es pública la información que posea cualquier ente estatal, con **excepción de reserva temporal** **por razón de interés público** **en los términos que fijen las leyes;** y en la fracción segunda se ordena, que la referente a la vida privada y datos personales, sea protegida.
3. Por lo tanto, se puede determinar que, a rango constitucional **el ejercicio del poder público debe operar bajo la máxima publicidad y accesibilidad, solo limitada por circunstancias específicas establecidas por la ley**, y que pudieran implicar que la divulgación de la información atente contra los derechos de terceros o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas.
4. Así, témenos que como sucede con el ejercicio de otros derechos fundamentales, **el derecho al acceso a la información, se encuentra sujeto a determinadas restricciones; sin embargo, a efecto de no ser excesivas, que lleguen al grado de anular el ejercicio del derecho fundamental, están condicionadas a diversos aspectos,** de modo que, como lo indica la propia Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13.2, para que una restricción al derecho a la información pública pueda ser aplicable, debe demostrarse que ha cumplido con las condiciones de: i)*carácter excepcional, ii) consagración legal, iii) objetivos legítimos, iii) necesidad y proporcionalidad.*
5. Respecto de estas excepciones, la **Corte Interamericana al resolver el *Caso de Clade Reyes y Otros (sentencia del 19 de septiembre de 2006)*** preciso que, el establecimiento de **restricciones al derecho de acceso a la información bajo control del Estado, a través de la práctica de las autoridades, sin cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convención Americana, crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria en la clasificación de informaciones como secretas, reservadas** o confidenciales y genera inseguridad jurídica respecto del ejercicio de dicho derecho, así como del alcance de las facultades estatales para restringirlo; es por ello que, en atención al principio de máxima divulgación, toda excepción que precisen los entes públicos debe sujetarse a una serie de parámetros jurídicos.
6. Además, en la misma sentencia el tribunal interamericano puntualizó que la ley debe garantizar un acceso a la información pública que sea efectivo y lo más amplio posible, además de que, **en caso de contemplar excepciones, éstas no deben convertirse en la práctica en la regla general, sino deben ser la excepción sujetas a estudios casuísticos.**
7. En esa medida, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, **ha sostenido que las limitaciones impuestas al derecho de acceso a la información, como cualquier otra limitación que se imponga a cualquiera de las derivaciones del derecho a la libertad de expresión, deben ser necesarias en una sociedad democrática para satisfacer un interés público imperativo; debiendo escoger la que restrinja en menor escala el derecho protegido**, y observando que ésta: (i) sea conducente para alcanzar su logro, (ii) sea proporcional al interés que la justifica, e (iii) interfiera en la menor medida posible en el ejercicio efectivo del derecho.
8. De esta forma, del principio de máxima publicidad tanto en el ámbito internos como en la óptica internacional, deriva el que **las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y que toda limitación debe estar debidamente sujeta a una serie de parámetros con los cuales se permita determinar la menor limitación posible al derecho de acceso.**

Segunda cuestión: ¿Cuál es el marco legal que contempla el conjunto de limitaciones excepcionales al Derecho de Acceso a la información Pública en México en los casos en concreto?

1. Bajo este panorama, en congruencia con el marco constitucional y convencional, la Ley General de Transparencia y de forma equivalente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establecen dos supuestos bajo los cuales una autoridad del estado puede restringir el Derecho de acceso a la información pública ejercido por los particulares, dichas hipótesis de restricción las podemos delimitar en dos conjuntos, el primero como información: “**Confidencial”** y el segundo como información “**Reservada**”.
2. En este sentido, para proteger la vida privada y los datos personales –considerados como uno de los límites constitucionalmente legítimos–el artículo 116 de la legislación general reproducido de forma simétrica en el análogo 143 de ley local en la materia, se establece como criterio de clasificación el de “**información confidencial**”, el cual restringe el acceso a la información pública que contenga datos personales o haga referencia a la vida privada de una persona física que requieran el consentimiento de estos para su difusión, distribución o comercialización.
3. Por otro lado, para proteger el interés público, amabas legislaciones de manera homogénea en los numerales 113 y 140 de la ley general y de la ley local respectivamente, consideran la posibilidad de restringir el derecho de acceso a la información pública ejercido por los particulares, estableciendo la posibilidad de catalogar la información pública que obra en su poder **con la calidad de reservada.**
4. Además, la información que sea clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años; previendo, además, que podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o haya transcurrido el periodo de reserva.
5. En la misma lógica, los numerales en comento precisan un catálogo generoso de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda, entre otras en las aplicables en el presente caso:
* **Pueda causar daño u obstruya** la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, **afecte o vulnere la conducción** o los derechos **del debido proceso en los procedimientos** judiciales o **administrativos,** incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias **en tanto no hayan quedado firmes** o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
* **Vulnere la conducción de los expedientes** judiciales o **de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes**;
* **El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público** de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o **procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;**
1. Las hipótesis contenidas en las fracciones que se transcriben, para su actualización manifiestan dos momentos para poder restringir el derecho de acceso a la información pública, a saber:
2. En primer lugar, que la información solicitada se encuentre en un procedimiento vivo; y
3. Como segundo requisito, que el operador jurídico que posee la información, demuestre que su publicidad vulnera, transgrede y pone en riesgo la conducción de expedientes administrativos y demostrar que el daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público.
4. Ahora bien, en el presente caso el Sujeto Obligado clasifica de manera total como información reservada, de los expedientes de los procedimientos administrativos para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales donde ha estado y/o está interviniendo directa o indirectamente el municipio de Teoloyucan por un periodo de cinco años.
5. De lo anterior se observa que el sujeto obligado asume que genera, posee y/o administra la información, tan es así que la clasifica por un periodo de cinco años, si bien es cierto, el sujeto obligado clasifico la totalidad de los dos procedimientos administrativos en mención, se infiere que los oficios y anexos solicitados, dada su naturaleza, forman parte de los mismos.
6. Para funda y motivar dicha clasificación el Comité de Transparencia del Poder Legislativo proporciona el Acuerdo número PLEGISLA/LX/CT/12ªext/2024/TERCERO, cuyo contenido se precisa que el Sujeto Obligado aplicó la prueba de año establecida en el artículo 3 fracción XXXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como en Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
7. Dentro de la citada argumentación, se observa que el Sujeto Obligado se ajustó de manera somera a demostrar i) Un razonamiento lógico que demostrara que la información encuadra en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la Ley (fundamentación y Motivación), así como se enfocó a demostrar existencia de elementos objetivos que permitieron determinar que difusión de la información causaría un daño real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.
8. Sin embargo, si bien el artículo 140 citado con anterioridad, incluye como información reservada toda aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes; no debemos generalizar y asumir que, *per se* la información pública generada y que se ubique dentro de un procedimiento judicial o administrativo que no haya quedado firme tiene naturaleza de reservada, pues se estaría omitiendo la obligación por parte de la autoridad del estado de demostrar que su publicidad vulneraría el propio procedimiento.
9. Además, de consentir este Órgano Garante la reserva de la información solicitada, por el sólo hecho de encontrarse inmersa en un procedimiento que no ha causado estado, se anularía por completo la posibilidad de la existencia de casos excepcionales en los cuales existen intereses superiores de la sociedad de conocer la información.
10. Es decir, conforme a lo expresado por la Corte Interamericana, ha de vigilarse en todo momento, que las excepciones no se conviertan en regla general, dado que el derecho a la información juega un papel determinante en un Estado democrático, a partir del cual, los gobernados pueden ejercer un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos.
11. En este sentido, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la Acción de inconstitucionalidad 26/2006, concreto la tesis de jurisprudencia de rubro: **“INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN”**, de cuyo cuerpo, en el tema que interesa se precisa que: “…No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva.”[[1]](#footnote-1)
12. Así, se puede desprender que la restricción para acceder a la información relacionada con expedientes administrativos que no hayan causado estado, no puede considerarse como una regla absoluta. Debe hacerse una excepción a esta regla privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva cuando su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación.
13. Por esta razón, resulta inexacta la conclusión en la Prueba de Daño ejecutada por el Sujeto Obligado en consideración a que, en la fundamentación del acuerdo número PLEGISLA/LX/CT/12ªext/2024/TERCERO contenido en el acta de la décima segunda sesión extraordinaria 2024, se omitió tomar en consideración el supra citado criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es decir, el Sujeto Obligado no analizó la posibilidad de que los acuerdos de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés y anexos que contiene lo relacionado con los conflictos por límites territoriales entre el municipio de Teoloyucan, ostente características tan especiales que el beneficio social y colectivo que otorga su acceso es tan grande que la reserva no resultaba ser una barrera infranqueable.
14. En razón de lo anterior, este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la información Publica en la entidad Mexiquense, debe valorar de nueva cuenta a través de criterios razonables y ponderables el interés público en el presente caso, a fin de determinar si este interés público que reviste el expediente y anexos de mérito, resulta suficiente para restringir la necesidad de clasificar la información como reservada, o en su defecto, determinar si prevalece más el sigilo de la información.
15. Tercera cuestión: ¿El interés público que envuelve el expediente referido resulta suficiente para restringir la necesidad de clasificar la información como reservada?
16. Entonces al hablar de una valoración de los beneficios o perjuicios de la divulgación señalada, debe fundarse en las consecuencias concretas que, potencialmente, resulten de la publicidad de la información, se deberá ponderar si la publicidad de la información tienen una trascendencia social y poder ser catalogada como información de interés público***.* [[2]](#footnote-2)**
17. Así, este Instituto considera procedente efectuar una prueba de interés público ante la colisión de derechos que se plantea en el presente recurso de revisión, por una parte: i) el derecho aducido por el Sujeto Obligado consistente en el derecho a la secrecía de los expedientes en virtud de no haber causado estado, frente al derecho ejercido por el particular consiéntete en el Derecho de Acceso a la Información Pública. Lo anterior, conforme a lo que mandata la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual en su artículo 149 refiere la posibilidad, tratándose de colisión de derechos, la solución bajo el principio de proporcionalidad en observancia a las gradas de: idoneidad, necesidad y proporcionalidad (premisa que es replicada en el artículo 184 de la ley local en la materia), tal y como se precisa:

*“Artículo 149.* ***El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.” (Sic)***

*Para estos efectos, se entenderá por:*

***I. Idoneidad:*** *La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;*

***II. Necesidad:*** *La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y*

***III. Proporcionalidad:*** *El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.*

1. Ahora bien, utilizando lo precisado en la parte inicial de este apartado, el contenido de ciertos derechos fundamentales no puede ser absoluto, y la colisión entre derechos fundamentales no puede resolverse apelando a reglas de prioridad entre normas, s***ino mediante una ponderación que determine el derecho que ha de prevalecer*** en el caso concreto, esto conforme la doctrina de **Riccardnao Guastini al señalar que “***La ponderación, por tanto, no es una “conciliación*”. No consiste en “*poner de acuerdo*” los dos principios en conflicto, o en encontrar un punto de “equilibrio” entre ellos. No consiste en la aplicación o en el sacrificio parcial de dos principios. ***Uno de los dos principios es aplicado, el otro es ciertamente acantonado.”*** [[3]](#footnote-3)
2. En cuanto a la metodología de ponderación de derechos, es necesario citar el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación, en el que se dispone lo siguiente:

*Época Novena Época*

*Registro 174338*

*Instancia Tribunales Colegiados de Circuito*

 *Tipo de Tesis: Aislada*

*Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo XXIV. Agosto*

*SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR.*

***Cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipio****s siguientes: a)* ***idoneidad,*** *la cual es la legitimidad constitucional del principio adoptado como preferente, por resultar ser el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el objetivo pretendido; b)* ***necesidad,*** *consistente en que no exista otro medio menos limitativo para satisfacer el fin del interés público y que sacrifique, en menor medida, los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios; o sea, que resulte imprescindible la restricción, porque no exista un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin deseado y que afecten en menor grado los derechos fundamentales de los implicados; y c****) el mandato de proporcionalidad*** *entre medios y fines implica que al elegir entre un perjuicio y un beneficio a favor de dos bienes tutelados, el principio satisfecho o que resulta privilegiado lo sea en mayor proporción que el sacrificado. Esto es que no se renuncie o sacrifiquen valores y principios con mayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. Así, el derecho o principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que optimice los intereses en conflicto y, por ende, privilegiándose el que resulte indispensable y que conlleve a un mayor beneficio o cause un menor daño. Consecuentemente, tratándose de la suspensión debe negarse dicha medida cautelar cuando el interés social constitucionalmente tutelado es preferente al del particular, ya que el derecho o principio a primar debe ser aquel que cause un menor daño y el que resulta indispensable privilegiarse, o sea, el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio.” (Sic)*

1. De lo que se desprende que, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión debe resolverse el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de **proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) Idoneidad. b) necesidad y c) proporcionalidad:**
2. Análisis en el caso en concreto de la primera grada de la ponderación: Idoneidad.
3. Cabe recordar que, sin la intensión de entrar en materia de los derechos que involucran el procedimiento que únicamente compete a la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, esta autoridad se abocara a la publicidad del acuerdo y anexos por motivo de la existencia de un interés social que motiva y obliga hacerla del dominio público.
4. Una vez puntualizado lo anterior, la presente solicitud de acceso a la información para este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información evidencia el ejercicio del derecho de acceso a la información, en contraposición al derecho de sigilo que deben guardar los expedientes y anexos que se generan a raíz del procedimiento para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales cuando aún no ha quedado firme o no haya concluido.
5. Al respecto, ambos derechos se encuentran reconocidos en el plano constitucional, en igualdad de características para los gobernados. Sin embargo, en el presente caso, existe una trascendencia social del caso relacionado con la información correspondiente al conflicto diferendo limítrofe con el municipio de Lerma, en atención a los siguientes argumentos:
6. Primero, es precedente la publicidad del referido expediente y anexos en atención a la proyección pública de las partes, ya que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define al municipio como:

*“****Artículo 115****. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:*

***I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.***

 *La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.*

***Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años****.*

*La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.*

*…*

*II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.*

*El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:*

***a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad****…(Sic)*

1. Lo que se robustece con lo señalado por el artículo 1 de la Ley Municipal del Estado de México, que señala:

***“Artículo 1.-*** *Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular las bases para la integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipales.*

***El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, investido de personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” (sic)***

1. Por lo que se precisa la existencia de elementos objetivos que permiten demostrar la relevancia del asunto por virtud de tratarse de municipios que son conocidos por todos, es decir, son entes públicos ya que su esencia es realizar actividades de interés público.
2. En tal contexto, la única forma que tiene la ciudadanía en general de constatar el buen funcionamiento y actuar de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México así como el Ayuntamiento de Teoloyucan, es accediendo a esta actuación de dicha autoridad mediante el derecho de acceso a la información pública, lo que le permitirá valorar el desempeño y actuar en los expedientes que contienen información relacionada con los conflictos por límites territoriales del municipio de Teoloyucan, al verse involucrados entes públicos.
3. Ante este panorama, es que se considera que existe un inminente interés público de conocer el expediente que contiene el conflicto por límites territoriales del municipio de Teoloyucan como toda la documentación relacionada, pues el permitir el acceso a la misma fomentaría la transparencia de las actividades de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México como del Ayuntamiento de Teoloyucan, promoviendo de manera implícita la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, es decir, se considera que el derecho de acceso a la información es el medio que colma el principio de idoneidad para la rendición de cuentas por parte de la autoridad sobre la efectiva investigación de hechos que son de la más alta relevancia, al estar relacionados con el quehacer público y el desempeño de los servidores públicos.
4. Con base en lo anterior, se considera que el principio que se debe adoptar en el presente asunto es el que subyace en el derecho fundamental de acceso a la información, puesto que a través de éste se busca no sólo satisfacer un interés individual, sino la necesidad de la colectividad de estar en posibilidad de evaluar el desempeño de las autoridades, en el caso de mérito.
5. Análisis de la segunda grada de la ponderación: Necesidad.
6. Nuestra carta magna, así como diversos ordenamientos reconocen los principios bajo los cuales deben regirse los procedimientos administrativos, como lo es el principio de publicidad que implica el deber del dictaminador de procurar que el proceso se desarrolle con conocimiento público, es decir, se admite la posibilidad de que el desarrollo general del proceso y determinados actos procesales sean de conocimiento de cualquier interesado, este principio constituye una garantía de la administración de la justicia, a fin de demostrar que no existe algo escondido en el proceso, que preste a suspicacias de las partes o duda en cuanto a la imparcialidad de la autoridad señalada.
7. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el *Caso Claude Reyes y otros vs. Chile*[[4]](#footnote-4), estimó que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública haciendo posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que, puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
8. Así, la divulgación de la información en poder del Estado, que sea de interés público, juega un rol muy importante en una sociedad democrática, pues habilita a la sociedad civil para controlar las acciones del gobierno a quien ha confiado la protección de sus intereses, lo cual **es necesario para evitar abusos de los funcionarios gubernamentales, promover la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Estado y permitir un debate público sólido e informado para asegurar la garantía de contar con recursos efectivos contra tales abusos.**
9. En este sentido, este Instituto observa que también se actualiza el principio de necesidad, ya que no existe un medio menos oneroso para lograr el fin constitucionalmente válido, en tanto que el ejercicio del derecho de acceso a la información es la única vía para que cualquier persona acceda a la información solicitada, que en este caso lo son los acuerdos de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés dónde la Legislatura del Estado se declaró incompetente de seguir conociendo los diferendos limítrofes del Municipio de Teoloyucan incluidos sus anexos.
10. La necesidad de hacer pública el multicitado expediente deriva de la trascendencia social al involucrar entes públicos como quedó demostrado.
11. Así mismo, el acceso a la información los acuerdos de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés dónde la Legislatura del Estado se declaró incompetente de seguir conociendo los diferendos limítrofes del Municipio de Teoloyucan incluidos sus anexos, es una aportación a la rendición de cuentas, que evidencia el actuar de la autoridad encarga del asunto como del Poder Legislativo y el municipio involucrado, que en este caso lo es el en términos de su competencia y atribuciones.
12. Finalmente, el análisis de la tercera grada de la ponderación: Proporcionalidad
13. El divulgar una decisión tomada por una autoridad derivado de un procedimiento que no ha concluido, pero que le reviste el carácter de interés público, permite conocer de alguna forma los elementos tomados en consideración por éste para resolver en tal o cual sentido u otorgar el beneficio del derecho a tal o cual persona y, por ende, se justifica en razón de que se satisface el interés público de valorar el desempeño, la eficiencia y eficacia del dictaminador en el caso que se analiza.
14. Luego entonces, es posible advertir un margen de beneficio mayor al favorecer el derecho de acceso a la información, respecto de la secrecía de la información solicitada, pues favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Ayuntamiento de Teoloyucan, como de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México y fortalece el escrutinio ciudadano sobre sus actividades sustantivas.
15. De tal suerte, que la intervención que subsume este ejercicio de ponderación apunta a la obtención de mayores efectos positivos para la sociedad y una afectación menor en el bien Jurídico de secrecía al expediente y anexos tomada por el Sujeto Obligado, favoreciendo el control ciudadano.
16. En resumen, si bien la información requerida es considerada como de acceso restringido, ya que encuadra en alguna de las excepciones a la publicidad de la información establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, replicada en el artículo 140 de la ley local, al tratarse de información relacionada con motivos de interés público, es que procede publicidad, pues su difusión contribuirá tanto a garantizar el ejercicio de acceso a la información, como a favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, fortaleciendo el escrutinio ciudadano sobre sus actividades sustantivas, cumpliendo así con los ideales planteados en los objetivos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del estado de México y Municipios.
17. En conclusión, al ser documentos firmes que no vulneran la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes; y siendo información de interés público que abona a la rendición de cuentas y a la transparencia de los entes que en el intervienen, razones por la cuales el acuerdo número PLEGISLA/LX/CT/12ªext/2024/TERCERO contenido en el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria 2024, de fecha cinco de abril de dos mil veinticuatro, resulta improcedente en el presente caso en particular, por los motivos y fundamentos expuestos en el presente considerando; por consiguiente, lo dable es ordenar en términos del considerando quinto, los acuerdos de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés dónde la Legislatura del Estado se declaró incompetente de seguir conociendo los diferendos limítrofes del Municipio de Teoloyucan., con sus respectivos anexos.
18. Lo anterior, en consideración a lo dispuesto por el Criterio número 17/17 emitido por entonces denominado IFAI, actualmente INAI, relacionado con los anexos de un documento, que a la letra establece:

*“Anexos de los documentos solicitados. Los anexos de un documento se consideran parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de información relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán entregarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste expresamente su interés de acceder únicamente al documento principal.*

*Resoluciones: • RRA 0483/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. • RRA 4503/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. • RRA 1639/17. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.”*

# **QUINTO. De la versión pública.**

# **Nociones generales.**

1. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitada**,** eventualmente pudiera obrar datos personales susceptibles de protegerse, así como información susceptible de clasificarse como reservada, el **SUJETO OBLIGADO** deberá de hacer la adecuada versión pública, protegiendo los datos que no son susceptibles de ser proporcionados.
2. No pasa desapercibido para este Órgano Garante que los **Sujetos Obligados** serán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia. Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.El **Sujeto Obligado** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto. Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación.  | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación. De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial.  | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular. En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección. Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. Es por lo anterior que, no se puede tener por colmado el derecho de acceso la información del ahora **RECURRENTE,** al haberse remitido la información en un formato cerrado, y en consecuencia, resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **01448/INFOEM/IP/RR/2024**; por ello, y con fundamento en la fracción III del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **REVOCA** la respuesta a las solicitud de información número **00069/PLEGISLA/IP/2024.**
2. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO**. Resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer en el Recurso de Revisión **01448/INFOEM/IP/RR/2024**,en términos del Considerando **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **REVOCA** la respuesta emitida por el **Poder Legislativo** a la solicitud **00069/PLEGISLA/IP/2024** y se **ORDENA** entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), de ser procedente en versión pública, lo siguiente:

* **Acuerdos de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés y anexos, en los que la Legislatura del Estado se declaró incompetente de seguir conociendo los diferendos limítrofes del Municipio de Teoloyucan.**

Para efectos de lo anterior, se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición de **EL RECURRENTE**.

**TERCERO.** Notifíquese al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** la presente resolución, vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo, y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios dé cumplimiento a lo ordenado dentro **del plazo de diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente; y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO. Notifíquese al RECURRENTE** la presente resolución vía **SAIMEX**.

**QUINTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento de **EL RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Visible en: [*http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/170/170722.pdf*](http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/170/170722.pdf). Consultado en fecha 18 de marzo de 2019. [↑](#footnote-ref-1)
2. Al respecto la fracd6n XII del artículo 3 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, define a la información de Interés público como:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

…

**XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual**, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;

… [↑](#footnote-ref-2)
3. Michelle Zezza. LA RACIONALIDAD DE LA PONDERACIÓN JUDICIAL: ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS DE ROBERT ALEXY Y RICCARDO GUASTINI” Universidad Carlos III de Madrid. 2006. Visible en: <https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/26545/WF-18-03.pdf>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006. [↑](#footnote-ref-4)